



SALA TERCERA DE DECISION LABORAL

PROCESO	Ordinario
DEMANDANTES	Luisa Fernanda Marulanda Gómez en nombre propio y en representación de su hija Salome Castañeda Marulanda
DEMANDADO	Zandor Capital S.A. y Dar Ayuda Temporal
LITISCONSORTE NECESARIO POR PASIVA	Operaciones Mineras de Antioquia OPAN S.A.
PROCEDENCIA	Juzgado 11 Laboral del Circuito
RADICADO	050013105 011 2014 01632 01
INSTANCIA	SEGUNDA
PROVIDENCIA	SENTENCIA Nro. 186 de 2020
TEMAS Y SUBTEMAS	Culpa patronal - indemnización plena de perjuicios artículo 216 del C. S. del T.
DECISIÓN	Revoca y Modifica sentencia

En la fecha, **veintitrés (23) de septiembre de dos mil veinte (2020)**, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral integrada por los magistrados Martha Teresa Flórez Samudio, Orlando Antonio Gallo Isaza, y Luz Amparo Gómez Aristizábal, procede a emitir pronunciamiento con relación a los recursos de apelación interpuesto por las demandantes, **Zandor Capital y Dar Ayuda Temporal** frente a la sentencia proferida por el Juzgado 11 Laboral del Circuito dentro del proceso ordinario promovido por **Luisa Fernanda Marulanda Gómez** en nombre propio y en representación de su hija **Salome Castañeda Marulanda**, en contra de la las referidas sociedades, trámite al que se vinculó como litisconsorte necesario por pasiva a **Operaciones Mineras de Antioquia OPAN S.A.S.** radicado único nacional 05001 3105 **011 2014 01632** 01.

La Magistrada ponente en acatamiento de lo previsto en el artículo 15 del Decreto 806 del 04 de junio de 2020, en concordancia con los Acuerdos del Consejo Superior y Seccional de la Judicatura, sometió a consideración de los restantes integrantes el proyecto, estudiado, discutido y aprobado en sala virtual mediante acta **Nº 020**, que se adopta como sentencia y se plasma a continuación.

Antecedentes

Se convocó a juicio a las accionadas pretendiendo se declare que el accidente en el cual perdió la vida Omar Castañeda Bejarano, compañero permanente y padre de las demandantes, fue de tipo laboral y por culpa de la empleadora, en consecuencia, se condene a las demandadas al pago de los perjuicios establecidos en el artículo 216 del C.P.T y la S.S, incluidos los morales y daño a la vida en relación.

En sustento de sus pretensiones indicaron que Omar de Jesús Castañeda Bejarano, nació el 20 de agosto de 1985, celebrando contrato de trabajo con Dar Ayuda Temporal el 1 de octubre de 2011, empresa que lo envió a laborar con Opan en la Mina El Silencio de propiedad de Zandor Capital, finalizando dicho vínculo el 1 de enero de 2012, ante su fallecimiento; que el 12 de diciembre de 2011 cuando Omar se encontraba realizando su labor de homogenizador, la pulverizadora se atoró, por lo que el mismo procedió a subirse encima de la carcasa de la máquina, la cual se encontraba encendida, para desatorarla con una palanca de acero de unos 2.20 metros de largo, la cual una vez se desatora transmite toda su fuerza, golpeándolo la palanca en el rostro, lo cual le ocasionó un trauma interno en la cabeza, perdiendo el equilibrio, cayendo sobre unas columnas en construcción que tenía unas varillas expuestas, las cuales le generaron heridas en la espalda, siendo trasladado a la clínica donde perdió la vida unos días después; que Dar Ayuda Temporal omitió el deber de brindar capacitación para la

manipulación de la maquina machadora, al no contar la misma con mecanismo de frenado alterno, sumado a que en el lugar de trabajo no contaba con una adecuada señalización, y no se le suministraron elementos de protección, como casco protector, arnés, eslingas, línea de vida, entre otras; que convivió con Omar por espacio de 6 años, unión de la cual nació Salome el 16 de enero de 2012, ello es, 12 días después del deceso de su padre; que dependía económicamente de un todo y por todo de su compañero permanente; que la ARL SURA, le reconoció el 100% de la pensión de sobrevivientes a Salome.

Posición de Dar Ayuda Temporal S.A (fls. 161 a 167)

Por medio de apoderado judicial y dentro del término legal dio contestación, aceptando lo relativo a la fecha de nacimiento del señor Omar, el contrato suscrito, la labor para la cual fue vinculado, el accidente sufrido el 12 de diciembre, la fecha del deceso, y el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a Salome, frente a los demás supuestos de hecho indica que no son ciertos, aclarando que al trabajador se le brindó una capacitación suficiente para la labor desempeñada, la cual consistía en estar pendiente de la banda alimentadora y en caso de atascarse, desatorarla con una barra de hierro, después de haber parado por completo la máquina. Afirma que el día del accidente, la maquina se atoró, y el trabajador sin observar las medidas de seguridad que se le habían indicado, como era parar la máquina, procedió a intervenirla en movimiento, montándose encima de la carcasa introduciendo una varilla metálica, con tan mala suerte que esta rebota con fuerza, lo golpea en su cara y lo lanza unos metros por encima, cayendo en unas columnas en construcción. Aduce que no era permitido montarse encima de la máquina, pues con la barra de hierro era suficiente para hacer presión sobre el material, sumado a que la maquina contaba con elemento de frenado, que el señor Omar laboraba a ras de piso por lo que no requería capacitación

para trabajo en altura, y que se le habían entregado todos los elementos de protección. Arguye que el trabajador no reportó en la hoja de vida a nadie como compañera permanente, como tampoco personas a cargo para la seguridad social, lo cual es corroborado por la señora Delia Bejarano, madre del fallecido, al afirmar que este siempre vivió solo y no tenía hijos.

Se opuso a la prosperidad de las pretensiones, explicando que el accidente de trabajo se produjo por culpa exclusiva del empleado al no observar las medidas de seguridad en el manejo de la máquina, siendo su desidia la que lo llevo a no apagarla, y en temeraria acción se paró en la carcasa. Finalmente, propuso las excepciones de meritó que denominó falta de legitimación en la causa por activa, mala fe de las demandantes, buena fe del empleador, prescripción y compensación.

Posición de Zandor Capital S.A. (fls. 221 a 242)

Por medio de apoderado judicial dio respuesta, manifestando no constarle o no ser ciertos los hechos expuestos, explicando que suscribió contrato civil de prestación de servicios con Dar Ayuda Temporal, obligándose esta última a suministrar personal en misión, sin que el señor Omar hubiese prestado sus servicios para Zandor, ni como trabajador directo, ni en misión, ni como contratista independiente, aclarando que si bien Dar Ayuda Temporal envió al señor Castañeda a la mina El Silencio de propiedad de Zandor, lo hizo en calidad de trabajador en misión de la empresa Operaciones Mineras de Antioquia S.A.S. "OPAN", entidad que dado el contrato celebrado, explotaba la mina. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones, formulando las excepciones de mérito que denominó falta de identidad entre la codemandada y la parte accionante, falta de requisitos del contrato de trabajo, responsabilidad exclusiva de terceros Dar Ayuda Temporal y OPAN, cobro de lo no debido, buena fe, y prescripción.

Mediante proveído del 29 de julio de 2015, el juzgado de conocimiento dispuso la citación como litisconsorte necesario por pasiva de Operaciones Mineras de Antioquia OPAN S.A.S, sociedad que, pese a que fue notificada en debida forma, no dio respuesta a la demanda tal y como se dejó plasmado en documento visible a folio 344.

Decisión de primera instancia

Contenida en sentencia proferida por el Juzgado Once Laboral del Circuito, en la que condenó de manera solidaria a Dar Ayuda Temporal S.A., Zandor Capital S.A y OPAN S.A.S. a cancelarle a Luisa Fernanda Marulanda Gómez en nombre propio y en representación de su hija, la suma de \$271.571.680 por concepto de indemnización de perjuicios patrimoniales, morales y vida de relación, suma que debe ser indexada al momento del pago. Impuso costas a cargo de las demandadas y la litisconsorte necesaria, fijando las agencias en derecho en la suma de \$40.735.752,00 distribuidos en partes iguales para cada una de accionadas.

Argumentó el fallador que se encontraba acreditado dentro del plenario que el señor Omar Castañeda fue contratado por Dar Ayuda Temporal para desempeñar el cargo de homogenizador en la Mina El Silencio, la cual era explotada por Operaciones Mineras de Antioquia, dado el contrato suscrito con Zandor Capital, así como que las accionadas incumplieron lo establecido en los artículos 82, 173 y 267 de la Resolución 2400 del 22 de mayo de 1979, siendo responsables de la muerte del señor Omar, al evidenciarse la culpa patronal, ello, en tanto, de los medios de convicción aportados y en especial de las fotografías visibles a folio 186, se advierte que en el lugar del accidente existía una altura considerable desde el sitio donde se podía parar el señor Omar a desatorar la máquina, que según lo dicho por los testigos era superior a 1.60, por lo que debía contar con un equipo adecuado para trabajo en alturas, máxime cuando se trataba de una

labor de riesgo, como lo es, operar una trituradora de material, debiéndose haber implementado tal y como lo establecen las Resoluciones 3673 de 2008 y 1409 de 2012, una línea de vida, lo cual no tenía el trabajador fallecido, deficiencia de la cual se percató la ARL Sura, pues en la inspección realizada indicaron que se debía capacitar en alturas a los trabajadores, a más que recomendó capacitaciones y reinducciones a los jefes de turno y de cuadrilla sobre seguridad industrial y los análisis de riesgos por oficio, así como implementar charlas periódicas de seguridad de 5 minutos para los operadores de máquina, barreras de seguridad ajustadas a la señalización específica para lugares de operación y cubrir las varillas salientes de la estructura de construcción.

Afirmó que también debieron implementar guardas metálicas como medidas de protección para el trabajador que desempeña funciones en máquinas con órganos móviles, a más que en el puesto no debían estar expuestas varillas, las cuales produjeron un menoscabo al empleado, pues fue en ellas en las cuales se incrustó al caer, advirtiéndose con ello, que las demandadas no implementaron las medidas de prevención necesarias para evitar el accidente, por el contrario, toleró y permitió que al interior de las instalaciones de la mina El Silencio se obviaran tales controles.

Adujo que en caso de que el señor Omar hubiese tenido excesiva confianza, así como que fue imprudente tal y como se afirmó al contestar la demanda, ello por sí solo no releva la responsabilidad del empleador, quien, indiscutiblemente no se liberó de sus obligaciones al no haber implementado la llamada cuerda de vida, a más que no ejerció su deber de supervisión y control que se le exigía a fin de prevenir e impedir el accidente en el que perdió la vida el empleado, concluyendo que la muerte del señor Omar, fue como consecuencia de la negligencia del empleador en el acatamiento de los deberes de velar por la seguridad y protección de su trabajador, a más que todo el plan de emergencias fue implementado con

posterioridad al accidente, por lo que condenó al pago de los perjuicios, en los montos ya relacionados, para lo cual tuvo en cuenta la fecha de fallecimiento de Omar, así como la de emisión de la sentencia, el salario devengado el cual correspondía al mínimo legal actualizado más lo correspondiente al porcentaje por gastos personales, así como la vida probable de la demandante según la Resolución 1555 de 2010, y la fecha en la que arribaría a los 25 años de edad la menor Salome, calculando el lucro cesante consolidado en \$41.332.942,00 para cada una y el lucro cesante futuro en \$74.498.573 para Luisa y \$51.470.407 para Salome. Los perjuicios morales, los tasó en 20 salarios mínimos para Luisa, y 10 para Salome, y el daño a la vida en relación en 21 salarios para Luisa y 25 para Salome. Ordenó la indexación a partir del 2 de marzo de 2019, día siguiente a la emisión de la sentencia, y hasta el pago de la obligación.

Arguyó que como las empresas de servicios temporales tienen como objetivo el suministro de mano de obra a un tercero denominado empresa usuaria, quien es el encargado de fijar las tareas y supervisar su ejecución, estas deben responder solidariamente por el pago de las condenas, al igual que Zandor Capital, al haber aludido el compromiso adquirido en el contrato suscrito con Opan para la operación y explotación de minería, esto es, el deber de verificar el cumplimiento de la normatividad de seguridad industrial, corroborándose con los testigos allegados que Zandor si ejercía control sobre la mina, pues a los mismos se les debía pasar informes de los hallazgos en la misma, estableciendo un plazo para cumplirlos.

Esgrimió que las demandantes estaban legitimadas por activa para presentar la demandada, al ser la hija del empleado fallecido, y la compañera permanente del mismo en los términos de la Ley 54 de 1990, al haber indicado el señor Fernando Marulanda Gómez y Adriana Marulanda Gómez, que su hermana Luisa y Omar convivieron desde abril de 2006, cuando ella tenía 15 años, y hasta el momento de la muerte de Omar,

primero lo hicieron en un hotel que administraba la mamá de Luisa, siendo Omar la persona que le suministraba alimento, vestuario y todo lo que necesitaba Luisa.

Recurso de apelación, oportunamente interpuestos por los apoderados de las partes, así:

Zandor Capital, se mostró inconforme frente a la solidaridad decretada, para ello reitera lo expuesto en la contestación de la demanda, en cuanto a que no tuvo ningún tipo de vínculo con el señor Omar, ya este fue contratado por Opan, empresa con la que celebró contrato de operaciones mineras, frente al cual si bien, se tenía una supervisión y fiscalización, ello, no los hace solidariamente responsables del pago de las acreencias condenadas en los términos del artículo 63 del C.C y 34 del C.S.T.

Demandante, solicita se modifique la condena al pago de perjuicios morales, pues fueron liquidados de manera conjunta con el daño a la vida en relación, y los mismos son independiente, para ello aduce que se debe tener en cuenta que la jurisprudencia ha establecido 100 salarios como límite para cuantificar los perjuicios morales, y que para el caso los testigos indicaron que la señora Luisa después de la muerte de Omar ha estado acongojada, no ha podido entablar amistades, supuesto que es corroborado por la misma en el interrogatorio de parte, cuando a las preguntas realizadas por poco y no es capaz de responderlas al entrar en llanto, sumado a que tuvo que acudir a la vía judicial para que le reconocieran a Salome como hija legítima de Omar, y que esta no va a tener un padre que la guíe.

Dar Ayuda Temporal, pide se revoque la sentencia al no haber quedado demostrado dentro del acervo probatorio la culpa, pues, por el contrario, se encuentra acreditado con la documental y con el testimonio de Claudia

Martínez, encargada de seguridad y salud, que el trabajador no laboraba en alturas y por tal no necesitaba arnés, que se le dio la capacitación necesaria para el desarrollo de su función, se le otorgaron los elementos de protección, y que el mismo fue imprudente, y tuvo una actitud temeraria al haberse subido a la carcasa a desatorar la máquina, a pesar de existir un mecanismo de frenado, el cual tenía que activar para poder meter la barra metálica y así desatorarla, tal y como se le había dado la inducción, sumado a que él por sí solo no podía intervenir la máquina, pues, tenía que llamar al supervisor para que este la desatrancara.

Indica que la mina está catalogada como segura, sin que se haya presentado ningún tipo de sanción frente a la misma por el no cumplimiento de las normas, a más que después del accidente, no se implementaron medias de protección, sino que se reforzaron.

De manera subsidiaria, y en caso de indicarse que se está ante la presencia de una culpa patronal, pide se analice la calidad de compañera permanente de la demandante, en tanto, pese a que los testigo afirman que la pareja convivió por espacio de 6 años, lo cierto es que existe prueba documental que evidencia lo contrario, pues, nótese como el señor Omar en la afiliación que realizó a la seguridad social, indicó que vivía solo y que era soltero, sumado a que Claudia Martínez, afirma que nunca le conoció novia a Omar, y que él vivía con su abuela, y Diego Vélez, adujo que Omar nunca le manifestó que tenía compañera permanente, a más que causa extrañeza que si uno tiene una compañera en embarazo con la cual vive, no la afilie a seguridad social, y que la ARL le conceda la pensión a la menor, pero no a ella.

Alegatos de conclusión

Dando aplicación a lo establecido en el artículo artículo 15 del Decreto 806 del 04 de junio de 2020, se le corrió traslado a las partes para alegar, haciendo uso de ellos:

Zandor Capital S.A. Colombia, quien solicita se revoque la sentencia de instancia, al haber quedado claramente establecido dentro del acervo probatorio que nunca fue empleadora del señor Castañeda, sumado a que no se logra acreditar la culpa patronal y que de demostrase la misma, ella no es objeto de responsabilidad solidaria, pues, ninguna persona puede ser culpada por las actuaciones de otra y mucho menos por las obligaciones que se hayan podido generar como consecuencia de ella.

Dar Ayuda Temporal S.A., aduce que de las pruebas obrante en el plenario se tiene que el accidente de trabajo ocurrió por un acto inseguro del trabajador al desatorar la máquina sin apagarla, omisión de instrucciones sobre la operación de la máquina, exceso de confianza al operar la máquina, acreditándose por demás que el trabajador tuvo suficiente capacitación, que se entregó elementos de protección personal para el cargo, y que estaba debidamente afiliado al sistema de seguridad social, no quedando con ello debidamente acreditada la culpa patronal.

Afirma, que no se encuentran fundamentos para emitir condena en favor de la señora Luisa, pues, si bien los hermanos de la misma afirman que ella convivió con el trabajador fallecido, eso pasa de ser solo de boca, puesto que los documentos provenientes del mismo trabajador dan cuenta de que no tiene compañera ni cónyuge o hacía vida con alguna persona, supuesto que se compagina con las declaraciones extraproceso rendidas por la madre del señor Castañeda y lo dicho por la señora Dora Ofelia.

Siendo esta la oportunidad para ello se procede al pronunciamiento de fondo, previas las siguientes,

Consideraciones

La Sala centrará su estudio en los puntos que fueron objeto de recurso de alzada al tenor de la directriz que para estos efectos traza el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984, en concordancia con el artículo 35 de la Ley 712 de 2001, por tal, el aspecto básico se centra en establecer si se encuentra suficientemente probada la culpa de la empresa en el accidente de trabajo sufrido por el señor Omar Castañeda, el cual a la postre le ocasionó su muerte, y en caso de darse una respuesta positiva se analizará lo concerniente a la solidaridad imputada a Zandor Capital, así como la calidad de beneficiaria de los perjuicios de Luisa Marulanda, y la liquidación de los perjuicios morales y daño a la vida en relación.

Pues bien, pertinente es recordar, que para el reconocimiento y pago de la indemnización ordinaria y plena de perjuicios prevista en el art. 216 del C.S.T., además de la ocurrencia del riesgo, accidente de trabajo o enfermedad profesional, debe estar acreditada la "*culpa suficientemente comprobada*" del empleador, responsabilidad que tiene una naturaleza eminentemente subjetiva, que lleva a que se establezca en estos casos no solo el daño a la integridad o a la salud del trabajador con ocasión o como consecuencia del trabajo, sino que se demuestre también el incumplimiento del empleador a los deberes de protección y seguridad, que le exige tomar las medidas adecuadas atendiendo las condiciones generales y especiales de la labor, tendientes a evitar que el trabajador, sufra menoscabo en su salud e integridad a causa de los riesgos de su actividad – véase la sentencias SL1558 de 2020, SL1565 de 2020, SL2248 de 2018, SL 1207 de 2018, SL 2349 de 2018, SL9355-2017, SL10262-2017 y SL17026-2016, entre otras.

Ahora, la prueba suficiente de la culpa del empleador, corresponde asumirla al trabajador o a los demandantes, según las reglas de la carga probatoria, lo que significa que demostrada en concreto la omisión del empleador en el cumplimiento de sus deberes de protección y seguridad, se genera la obligación de indemnizar al trabajador por los perjuicios causados, y teniendo en cuenta que de conformidad con lo consagrado en el art. 1.604 del Código Civil la prueba de la *"diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo"*, si el empleador pretende cesar o desvirtuar su responsabilidad debe asumir la carga de probar la causa de la extinción de aquélla, tal como lo dispone el art. 1.757 *ibídem*. (Véanse las sentencias SL1558 de 2020, SL1565 de 2020, SL-1757 de 2018, SL-5619 de 2016, SL-17026 de 2016, SL 4350 de 2015, SL-7181 de 2015, SL-6497 de 2015 entre otras).

Así, frente al aspecto de la carga de la prueba en procesos dirigidos a indagar por la culpa patronal en la ocurrencia de accidentes de trabajo, en sentencia de la CSJ SL13653-2015 del 7 oct. 2015, se puntualizó que *"esta Sala de la Corte ha dicho insistentemente que "...la parte demandante tiene la carga de probar la culpa o negligencia del empleador que da origen a la indemnización contemplada en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, además de que el empleador puede desligarse de ella demostrando diligencia y cuidado en la realización del trabajo..." (CSJ SL2799-2014)». Adicionalmente, ... ha dicho que a pesar de lo anterior "...cuando se imputa al patrono una actitud omisiva como causante del accidente o la enfermedad profesional, a éste le corresponde demostrar que no incurrió en la negligencia que se le endilga, aportando las pruebas de que sí adoptó las medidas pertinentes en dirección a proteger la salud y la integridad física de sus trabajadores" (CSJ SL7181-2015), de lo anterior se desprende que al trabajador o demandantes les atañe probar las circunstancias de hecho que dan cuenta de la culpa del empleador en la ocurrencia del infortunio, pero por excepción con arreglo a lo previsto en los arts. 167 CGP y 1.604 C. C., cuando se denuncia el incumplimiento de las obligaciones de cuidado y protección se invierte la carga de la prueba y es "el empleador el que asume la*

obligación de demostrar que actuó con diligencia y precaución, a la hora de resguardar la salud y la integridad de sus servidores”.

Aparte de lo anterior debe tenerse en cuenta el mandato de los numerales 1º y 2º de artículo 57 del C. S. del T. que ordenan al empleador poner a disposición de los trabajadores *“instrumentos adecuados”* y procurarles *“locales apropiados y elementos adecuados, de protección contra los accidentes y enfermedades profesionales en forma que se garanticen razonablemente la seguridad y la salud”*.

De igual manera, el art. 348 del mismo estatuto preceptúa que toda empresa está obligada a *“suministrar y acondicionar locales y equipos de trabajo que garanticen la seguridad y salud de los trabajadores”* y a adoptar las medidas de seguridad indispensables para la protección de la vida y la salud de los trabajadores, lo cual guarda armonía con las disposiciones en materia de salud ocupacional y seguridad en los establecimientos de trabajo que prevén dentro de las obligaciones patronales las de *“proveer y mantener el medio ambiente ocupacional en adecuadas condiciones de higiene y seguridad”* -art. 2º R. 2400/1979.

En esa misma línea, el artículo 84 de la Ley 9 de 1979 estableció que, entre otras obligaciones, los empleadores están movidos a proporcionar y mantener un ambiente de trabajo en adecuadas condiciones de higiene y seguridad; establecer métodos de trabajo con el mínimo de riesgos para la salud dentro de los procesos de producción; cumplir y hacer cumplir las disposiciones relativas a salud ocupacional; responsabilizarse de un programa permanente de medicina, higiene y seguridad en el trabajo destinado a proteger y mantener la salud de los trabajadores; adoptar medidas efectivas para proteger y promover la salud de los trabajadores mediante la instalación, operación y mantenimiento, en forma eficiente, de los sistemas y equipos de control necesarios para prevenir enfermedades y accidentes en los lugares de labores y realizar programas educativos sobre los riesgos para la salud a que estén expuestos los trabajadores y acerca de

los métodos de su prevención y control.

En ese sentido, es del caso resaltar que el empleador, para evitar la producción de daños en contra del trabajador, debe llevar a cabo una política de seguridad y salud en el trabajo, regulada en la Ley 9 de 1979, en la Resolución 2400 del mismo año, emanada del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en el Decreto 614 de 1984, en la Resolución 1016 de 1989 de los Ministerios del Trabajo y Seguridad Social y de Salud y en el Decreto 1295 de 1994.

Para materializar la política de prevención de siniestros laborales, el empleador debe adoptar y poner en funcionamiento un Comité Paritario de Salud Ocupacional (artículo 28 del Decreto 614 de 1984), con el fin de detectar los riesgos ocupacionales de manera oportuna, para poder tomar las medidas pertinentes, tendientes a evitar la ocurrencia de algún infortunio.

Lo anterior conlleva que, cuando ocurra un accidente de trabajo o se estructure una enfermedad profesional por omisión en la adopción de medidas de seguridad y protección, el empleador tiene que demostrar que de manera oportuna y razonable identificó los riesgos ocupacionales y tomó todas las medidas de prevención pertinentes, sólo así podrá exonerarse de culpa patronal.

Precisado lo anterior, la Sala aborda el estudio de los medios de convicción obrantes en el expediente, a fin de determinar si el accidente de trabajo de Omar de Jesús Castañeda Bejarano, ocurrió por la culpa de su empleador, en tanto no tomó las medidas de protección necesarias tendientes a evitar el insuceso.

Así se tiene que a folios 26 a 30, 182 a 186 cuaderno 1, 4 a 9 y 429 a 432 del cuaderno 2, obra *"FORMATO DE INVESTIGACION DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO para empresas afiliadas a la ARP SURA, Resolución 1401 de 2007"*, en el cual se describe por parte del investigador y con la información brindada por Ubeimar Urrego, el accidente padecido por el señor Omar, así: el trabajar *"se encontraba realizando su labor habitual como Homogenizador en la Plaza Bolívar /.../ luego de estar laborando durante toda la mañana, la pulverizadora se atoró, el señor Castañeda procedió a montarse encima de la carcasa de la pulverizadora para desatorarla con una palanca de acero de unos 2,20 metros de largo; la maquina no se apagó para realizar el procedimiento, por esa razón al momento en que la maquina se desatora, transmite toda la fuerza golpeando con el martillo interno de la maquina (machadora) a la palanca, y esta a su vez golpea al señor Castañeda en el rostro ocasionándole trauma interno en la cabeza, el operario a su vez pierde el equilibrio y cae sobre una columna de construcción que tenía varias varillas expuestas de ½ pulgadas, que generaron heridas en la espalda"*, enunciándose como causas inmediatas del accidente, condiciones subestandar: *deficiencia de señalización, sistema de seguridad de la máquina, columnas descubiertas por construcción en desarrollo;* como actos subestandar: *desatascar la máquina de material sin apagarla antes, omisión de instrucciones previas sobre operación de la máquina, exceso de confianza al manipular la maquina en movimiento.*

así mismo, se indicaron como factores de trabajo, *parámetros de supervisión,* y como factores personales *exceso de confianza y omisión de instrucciones, por parte del trabajador.*

De igual forma, se aporta a folio 187 a 188, información sobre el puesto de trabajo de Omar de Jesús, describiéndose como oficios del Homogenizador *transportar cargas hasta la trituradora, empacar el material en costales de fibra, transportar cargas hasta la volqueta, empujar con una pala manual u otra herramienta manual, el material aurífero hacia la trituradora, estar pendiente de la banda a la cual cae material triturado que luego cae a la pulverizadora en algunos momentos esta se atasca de material y debe proceder a apagar la maquina aunque este parada y desatranclarla con una barra,* función esta última que se encontraba realizando al momento del accidente. Como elementos de protección personal para el

desarrollo del cargo, se deben utilizar, casco, protectores auditivos, gafas, tapabocas, botas, guantes, sudadera y camiseta.

De igual forma se trajo al plenario la declaración de **Wilson Alexander Plata Ramírez**, quien indicó que conocía a Omar al ser compañero de trabajo y encontrarse al lado de él al momento del accidente, a más que le consta que el día del accidente, se le metió mucha carga a la pulverizadora y se empezó a atorar, pero no de manera completa, razón por la cual esperaron unos minutos a ver si se desatrancaba, y como ello no sucedió, Omar procedió a coger una barra y desatorarla, procedimiento rutinario y que realizaban siempre los machadores cuando se presentaba un atasco; que desatorar la maquina sin apagarla era un protocolo que se tenía, en tanto, la parte de machadores y el encargado de producción no paraba; que Omar se paró en la tapa pulverizadora, cogió la barra, y por el orificio que tenía la maquina la metió, chuzando la carga, lo cual permitía que los martillos despegaran, hasta que iniciaba nuevamente el proceso, no obstante, en este procedimiento de desatorar la máquina, la barra se le fue muy hondo a Omar, y al girar los martillos le pegaron a la barra, devolviéndosela a Omar, y golpeándolo, momento en el cual perdió el equilibrio, parándose en las bandas que estaban girando a gran velocidad, las cuales lo tiraron a unos metros, donde se encontraban unas varillas de una construcción que estaban realizando, las cuales se le introdujeron en la espalda, razón por la cual corrió de manera inmediata a auxiliarlo; que las bandas no estaban cubiertas por nada, no obstante, después del accidente les colocaron unas guardas de seguridad; que para la fecha del accidente había una persona encargada de la máquina, la cual tenía la función de decir que la apagarán cuando se atascaba para que no se fueran a quemar o reventar las bandas, pero esa persona no estaba en el momento en que ocurrieron los hechos; que para el 12 de diciembre de 2011 él hacía parte del comité de brigada de rescate, y había un comité de salud ocupacional presidido por Claudia Martínez; que después del accidente pusieron unos

tubos alrededor de la máquina, y todos los que estuvieran allá, tenían que tener un arnés y eslinga, las varillas las doblaron un poco y pusieron unos tarros, de igual forma, pusieron dos o tres turnos de brigadistas.

Claudia Milena Martínez Agudelo, consultora de seguridad y salud en el trabajo de Dar Ayuda temporal hasta el 14 de diciembre de 2011 y a partir del 28 de diciembre de la misma anualidad con Opan, indicó que no le tocó el accidente sufrido por el señor Omar, al haber estado en Medellín realizando gestiones de terminación de contrato, no obstante, sí conoce el proceso de investigación que se llevó a cabo a raíz del mismo, el cual arrojó unas condiciones ambientales de riesgo, una actuación y unos actos inseguros por parte del trabajador, unas condiciones de inseguridad; que el área donde laboraba Omar no era insegura, en tanto, solo le correspondía ejercer una labor de supervisión de transporte de material, así como que las máquinas funcionaran, teniendo como directriz que en caso de atascamiento, la misma debía apagarse a través del mecanismo de pare automático con que cuenta la misma, sin tenerse por instrucción el subirse encima para desatorarla; que el trabajo realizado por el señor Omar no requería capacitación en alturas, pues se desarrollaba a ras de piso; que un elemento necesario para la labor que desarrollaba el señor Omar era la barra metálica de 2,5 metros, la cual es utilizada para realizar procesos de desatoramiento al estar ello dentro de las funciones; que la maquina no tenía guardas de seguridad, y así quedó evidenciado dentro de las medidas preventivas en la relación de causales del accidente de trabajo; que dado el proceso de investigación solo conoce una inducción que se le hace los machadores, desconociendo si la misma se brindó al fallecido.

Carlos Diego Vélez Rendón, coordinador de personal de Dar Ayuda Temporal, indicó que al señor Omar se le dio inducción como machador, función que es de las más sencillas de la mina; que a Omar no le correspondía desatorar la máquina, pues solo debía estar pendiente del

encendido y apagado de la misma, así como del material que llegaba, pues en caso de que se obstruyera, Omar debía llamar al personal de mantenimiento; que el personal que manejaba la máquina no tenía capacitación en alturas, al quedar la misma a ras de piso, no obstante, si se le brindó capacitación sobre su puesto de trabajo, la cual quedaba por escrito, y todos los días se les hacía una charla de 5 minutos; que después del accidente le pusieron a la máquina unas guardas de seguridad; que la maquina tiene un sistema de encendido y apagado, mas no de frenado de emergencia, ya que no lo amerita.

De acuerdo a lo planteado y quedando claro que en el caso se invirtió la carga de la prueba al haberse denunciado por parte de las pretensoras incumplimiento de las obligaciones de cuidado y protección, le correspondía a la parte demandada demostrar que actuó con el máximo deber de cuidado impuesto por las normas de trabajo y salud frente a las labores cumplidas por la víctima del accidente, así como con la diligencia y precaución para evitar el siniestro, lo que no se evidencia en el plenario, pero no por las razones expuestas por el juez de instancia, en tanto, del material probatorio aportado y de acuerdo a las funciones encomendadas al señor Omar, de ninguno se advierte que el mismo trabajara en alturas, no obstante, si se evidencia que el accidente en el que perdió la vida no podía ser considerado como un hecho imprevisto, mucho menos inevitable, pues la función de Homogenizador acarreaba el desatranque de la maquina pulverizadora y para ello se le suministraba una barra de hierro de aproximadamente 2,20 metros, por lo que el desatore era un riesgo plenamente identificado, susceptible de preverse y controlarse si se hubiesen adoptado las medidas preventivas adecuadas, y en especial haberle brindado capacitación, inducción óptima para el manejo de la máquina, así como que el procedimiento empleado para desatascar la misma en caso de atranque era el seguro, requisitos esenciales para probar una conducta diligente y de cuidado por parte de las demandadas, para con

ello lograr la exoneración de responsabilidad en el referido accidente de trabajo, en tanto, se estableció y contrario a lo afirmado por el señor Carlos Diego, que dentro de su labor si estaba la de desatorar la máquina, tal y como se desprende de la documental visible a folio 187 y los demás testimonios arrimados, y que para dicha función se le entregaba una barra metálica.

Y si bien no se desconoce que las empresas contaban con un plan de salud ocupacional, pues de ello dan cuenta los testigos, y los documentos visibles a folio 445 y ss del cuaderno 2, "*acta de constitución y nombramientos de miembros del comité prioritario de salud ocupacional DAR AYUDA TEMPORAL*", así como la asistencia del señor Omar a una capacitación sobre sistema de seguridad social, procedimientos en accidentes de trabajo, manejo de incapacidades, y plan de emergencia (fls. 202 cuaderno 1), también lo es que lo que se le endilga a las hoy accionadas es no haberle dado capacitación al actor sobre el manejo de dicha máquina, pues pese a que el señor Carlos Diego, afirmó que al señor Omar se le había suministrado la misma y que de eso quedaba registro, el mismo brilla por su ausencia dentro del plenario, pues solo aparece el suministro de elementos de seguridad tales como guantes y tapabocas (fls. 201 cuaderno 1), sumado a que tampoco se advierte que existiera un plan de salud ocupacional ni capacitaciones respecto del manejo de la máquina que debía operar el occiso, y que el procedimiento diseñado por la empresa para desatorar la misma fuera el seguro, en la medida que esa afirmación genérica sobre el cumplimiento de planes de salud ocupacional y políticas de seguridad en especial frente a la máquina que le causó el deceso al señor Omar, se hizo con posterioridad al 12 de diciembre de 2011, tal y como se advierte de la documental del cuaderno 2, y de lo consignado en el informe de accidente de trabajo cuando en las medidas de intervención a implementar a fin de que no se repita, se estableció para el 10 de abril de 2012 reinducción y capacitación periódica a los operadores de las maquinas, reinducción y

capacitación a los jefes de turno y de cuadrilla, sobre la seguridad industrial y los análisis de riesgo de oficios de su área de trabajo específico; implementar charlas periódicas de seguridad de cinco minutos para los operadores de máquina y ayudantes 20 de enero de 2012 entre otras.

Sumado a que la ejecución de la labor de homogenizador, según las funciones enunciadas por la empresa, se constituye en factor de responsabilidad la necesidad del control efectivo del empleador y la adopción de medidas preventivas para evitar que el operario realice maniobras que no le están permitidas, pues, según los dichos del señor Wilson Alexander Plata Ramírez, era una directriz o instrucción subirse a la maquina a desatorarla sin necesidad de apagarla, pues ello solo se realizaba cuando el atasco era total, lo cual no se presentó en el caso, y si bien Milena y Diego, indican que el señor Omar no tenía nada que estar haciendo arriba de la máquina sin haberla apagado antes, lo cierto es que, para el caso, como ya se enunció, no existe evidencia sobre las capacitaciones que se le brindaron sobre el manejo de la pluricitada máquina, y que debía y no hacer en caso de atasco, pues dicho atoramiento era altamente previsible y de hecho le suministraban un elemento para desatascarla, y por ello susceptible de prevenirse, sumado a que tampoco existe una evaluación del riesgo en la manipulación de la máquina, y que el mecanismos implementado por la empresa para desatorarla era el seguro y adecuado.

Lo anterior también encuentra sustento en el informe de investigación del accidente de trabajo, el cual es ilustrativo de una causa inmediata consistente en la *"omisión de instrucción previa sobre operación de la maquina"*, lo que jugó un papel definitivo en la afectación de la vida del operario, medio de convicción que no hace más que poner de presente la culpa de la empleadora en el accidente de trabajo, al no contar con plan de contingencia para aminorar al máximo el riesgo, pues no bastaba con

advertir la existencia, sino que debía tomar todas las acciones encaminadas a evitarlo o por lo menos, a minimizar su impacto, lo cual lejos estuvo de realizar la empresa o por lo menos no está demostrado en el proceso, pues por el contrario, lo que sí está evidenciado es su actuar negligente y descuidado como ya se ha hecho ver a lo largo de esta decisión.

De ahí que sea dable afirmar que las demandadas no cumplieron con la carga procesal de demostrar que actuaron con diligencia y precaución, para resguardar la salud del operario, lo que significa que no acreditaron que hayan tenido una conducta que las eximiera de responsabilidad, en cuanto a haber desplegado la vigilancia debida y todas las gestiones necesarias para prevenir este tipo de accidentes, pues si bien resulta claro que es imposible eliminar totalmente los infortunios del trabajo, también lo es que si el empleador conoce de un determinado peligro al que expone a su colaborador en el desempeño de sus labores, es su deber adoptar todas las medidas a su alcance tendientes a evitarlo o corregir tales situaciones riesgosas, pues de no ser así, esto es, pudiendo prevenir el daño, no lo hace, debe responder por tal omisión, la que en este caso se materializó.

A la anterior conclusión se llega, teniendo en cuenta además que el fundamento primigenio del derecho del trabajo, su razón de ser, fue salvaguardar al trabajador frente a las contingencias que se presentaban en el lugar de trabajo. No solo existía una necesidad imperiosa de protección del ser humano trabajador, por su condición de tal, sino también en razón a que la única fuente de sus ingresos era su energía física, la cual era las más de las veces disminuida por las lesiones acaecidas al realizar su actividad.

Finalmente, y en cuanto a la propuesta de la demandada, tendiente a que hubo un actuar imprudente del trabajador que excluye la culpa patronal, debe decirse, que si en gracia de discusión se presentara una concurrencia de culpas, ello no exonera al empleador pago de la indemnización plena de

perjuicios, pues ha sido clara la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral, en sostener frente a esta temática que la indemnización plena y ordinaria de perjuicios consagrada en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, es una regulación autónoma de la responsabilidad patronal, por la cual no resulta operante el concurso de culpas previsto en el citado artículo 2357 del Código Civil. Posición que ha sido reiterada en las sentencias SL 35121 de 2009, SL5463 de 2015, SL5619 de 2016, SL10194 de 2017, SL2248 de 2018, SL1110 de 2018, SL 1565 de 2020, SL1336 de 2020, SL 633 de 2020 en las que se ha insistido que la responsabilidad por culpa comprobada del empleador en la ocurrencia del siniestro no desaparece porque el trabajador también haya actuado con culpa.

En virtud de lo anterior, procedente resulta **confirmar la sentencia de instancia** en este punto, pero por las razones aquí expuestas, y entrar examinar la viabilidad de incrementar las condenas impuestas, punto en el que estuvo en desacuerdo el apoderado de la demandante, no sin antes analizar lo concerniente a la calidad de beneficiaria de dichos rubros de la señora Luisa Marulanda, advirtiéndose que, contrario a lo afirmado por el juez, para el caso, no se avizora que la misma fuera la compañera permanente del señor Omar de Jesús, en tanto, si bien no se desconoce que tuvieron una hija, también lo es que los testigos Claudia y Diego, afirman no haberla conocido, y el señor Wilson Plata Ramírez, compañero de trabajo del señor Omar, aseveró que solo supo de ella cuando la misma lo contactó a fin de que rindiera testimonio, sumado a que de los documentos visibles a folio 168 y ss del cuaderno 1, se advierte que, Omar, en su hoja de vida reportó para el 1 de octubre de 2011, que era soltero, que tenía 1 hijo, y vivía en el barrio Galán de Segovia, sin indicar ningún beneficiario para la afiliación a salud y caja de compensación familiar, y que Dora Ofelia Sánchez Rojo, en declaración extra proceso ante el notario del circulo de Segovia, el 24 de enero de 2012, dijo que conocía a la señora

Delia Rosa Bejarano Quiñonez, madre del señor Omar Castañeda Bejarano, y que le consta que este *"al momento de fallecer era de estado civil soltero, sin compañera permanente, no tenía hijos reconocidos. Toda la vida vivió con su abuela María Virgelina"*, supuesto que es corroborado por Carlos Diego Vélez, cuando afirma que Omar vivía con su abuelita, y por Claudia Milena Martínez, al aducir que Omar era soltero.

No se desconoce que al plenario se trajeron las declaraciones de Fernando Marulanda Gómez y Adriana Marulanda Gómez hermanos de la demandante, y que dichos testimonios por si solos no se pueden ser excluidos al ser hermanos de la demandante, empero, si deben ser analizados con más rigurosidad frente a las demás pruebas aportadas, y si bien los mismos indicaron que la pareja convivió desde el 2006, en el hotel que administraba su madre en Segovia, cuando Luisa tenía un poco más de 15 años, afirmando además que nunca se separaron, también lo es, que no se trajo al plenario ningún otro testigo que corroborara tal supuesto, máxime cuando el propio hermano de Luisa indica que era una relación de público conocimiento para familiares y amigos, sumado a que el señor Omar reporta el barrio Galán como su dirección de residencia, y Adriana indica, que ahí era donde vivía Omar con su abuela antes de convivir con su hermana, a más de lo anterior, debe tenerse presente que la liquidación de prestaciones sociales del señor Omar de Jesús fue entregada a su señora madre, fls 195 y ss del cuaderno 1, y que para establecer que Salome era hija del fallecido, la señora Luisa, debió iniciar un proceso de filiación, por lo que procedente resulta la revocatoria de la decisión, frente al reconocimiento de los rubros ordenados por el juez de instancia a Luisa Marulanda.

En lo que respecta a la inconformidad planteada por el apoderado demandante, frente a la liquidación de perjuicios morales y daño a la vida en relación, al considerar que los mismos fueron tasados de manera

conjunta por el juez de instancia, debe decirse, que dichos rubros se calcularon de manera individual, tanto es así que en la parte considerativa de la decisión el fallador indicó que por perjuicios morales establecía para Luisa 20 salarios mínimos y para Salome 10 salarios mínimos, y por daños a la vida de relación a Luisa 21 salarios mínimos y a Salome 25, solo que en la parte resolutive los unificó; ahora, pese a que está acreditado el vínculo filial entre Salome y su padre Omar, y que frente a los perjuicios morales opera la presunción *prohominis* (sentencias SL4913 de 2018, en la cual reitera lo dicho en la SL13074 de 2014), ello es que se presume el dolor, la aflicción, la congoja de quien invoca y, desde luego, prueba la relación familiar con la víctima directa; condición no solamente anclada en lazos de amor y cariño y forjada en la solidaridad, la colaboración y el apoyo mutuos, sino también a través de un vínculo consanguíneo, afín, por adopción o de crianza, para el caso, no se encuentran razones para aumentar la condena por perjuicios morales subjetivados, los cuales, con apoyo en el *arbitrio juris*, se estiman bien tasados, ocurriendo lo mismo con el daño a la vida en relación, el cual se sustenta en la ausencia del padre y la aflicción íntima que genera en Salome no poder crecer con su acompañamiento.

Como emergió la responsabilidad del empleador en el accidente de trabajo y en la medida que se encuentran tasados los perjuicios correspondientes, se abre paso el **análisis de la solidaridad impuesta** a Zandor Capital, indicándose que el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo tiene como objetivo central, garantizar la protección de los trabajadores o beneficiarios en lo atinente al reconocimiento y pago efectivo de las acreencias a su cargo, producto de la contratación que efectúe el beneficiario o dueño de la obra con un contratista independiente para la realización o prestación de una obra o servicio determinado (véase la sentencia SL3636 de 2019 y SL13686-2017).

El objeto de dicha figura, es el de evitar el fraude a los trabajadores y sus derechos mediante la constitución de empleadores con menos capacidad económica o con negligente actuar que impidan la efectiva realización de las acreencias laborales de aquellos, como lo explicó la Corte Suprema Sala de Casación laboral en sentencia con radicado 14038 de 2010 y 35864 de la misma anualidad.

De acuerdo con ello y atendiendo lo indicado por la Jurisprudencia especializada en sentencia SL3636 de 2019, para dar aplicación al artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo se debe verificar: **(i)** la existencia de una relación laboral entre el trabajador que presta su servicio y el contratista independiente; **(ii)** el vínculo de carácter comercial entre el contratista independiente y la persona natural o jurídica que se beneficia de la actividad y; **(iii)** la relación de causalidad entre los dos vínculos o contratos suscitados con anterioridad. Cumplidos dichos supuestos, se debe calificar si la sociedad que funge como contratista desarrolla actividades que son del resorte o propias a las de quien es beneficiario de la obra o servicio contratado.

Así las cosas, y dado que según los documentos de folios 243 y ss del cuaderno 1, entre Zandor Capital S.A. y Operaciones Mineros de Antioquia Opan S.A.S. se celebró contrato de operación temporal para explotación y exploración minera el 17 de septiembre de 2011, acuerdo en el cual se estipulo que habría un interventor a fin de que velara por el cumplimiento del objeto del contrato haciendo especial énfasis en las condiciones de operación, la correcta utilización de maquinara, equipos y herramientas y el cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene minera, indicándose que el titular se reserva el derecho al cese inmediato de las actividades de exploración o explotación minera o sus actividades conexas en caso de que advierta una situación que sea generada por el operador que ponga en peligro o pueda poner en peligro las personas o bienes propios o de

terceros, hasta el momento en el que el operador rectifique dicha situación a satisfacción del titular del contrato, y que según los testimonios aportados, Wilson Alexander Plata, y Claudia Milena Martínez, indicaron que, Zandor tenía unos veedores en la mina, los cuales corroboraban el desarrollo del trabajo, y auditaban los planes de acción en cuanto accidentes, realizaban inspecciones de seguridad tanto en superficie como a nivel interno, y supervisaban los contratos; se advierte entonces que si hay una solidaridad de Zandor frente a la condena impuesta, pues si bien el señor Omar fue contratado por Ayuda Temporal, enviándose en misión a Opan, también lo es, que al haber contratado Zandor con Opan, la explotación de la mina, se constituyó en beneficiario directo de dicha obra, por lo que le corresponde responder de manera solidaria con Opan y con Misión Temporal, por las condenas impuestas.

Sin costas en esta instancia dadas las results de los recursos.

Con relación a las agencias en derecho señaladas por el a quo, la parte demandada y la litisconsorte necesaria por pasiva deberán solicitar su modificación en la debida oportunidad procesal (artículo 366 – 5 del Código General del Proceso), y el Juzgado considerar razonablemente su monto de conformidad con la condena aquí impuesta.

En mérito de lo expuesto, la **Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín**, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, **revoca y modifica el numeral primero** la sentencia proferida por el Juzgado Once Laboral dentro del proceso ordinario promovido por **Luisa Fernanda Marulanda Gómez** en nombre propio y en representación de su hija **Salome Castañeda Marulanda**, en contra de la **Zandor Capital S.A y Dar Ayuda Temporal S.A**, donde se vinculó como litisconsorte necesario por pasiva a **Operaciones Mineras de Antioquia OPAN S.A.S.**, en el

sentido de indicar que las demandadas de manera solidaria deben reconocer y pagar a favor de **Luisa Fernanda Marulanda Gómez** en representación de su hija **Salome Castañeda Marulanda**, la suma de **\$92.803.349,00** por concepto de lucro cesante consolidado y futuro, **\$8.281.160,00** por perjuicios morales y **\$20.702.900,00** por daño a la vida en relación. Se absuelve del pago de los rubros liquidados en favor de Luisa Fernanda Marulanda Gómez.

En lo demás se confirma la decisión de instancia.

Sin costas en esta instancia dadas las resultas de los recursos, las de primera con la observación incluida en la parte motiva.

Lo resuelto se notifica a las partes por **estados virtuales**, artículo 295 C.G. del P. en concordancia con el Decreto 806 de 2020.

Los magistrados (firmas escaneadas)


LUZ AMPARO GÓMEZ ABISTIZABAL
Magistrada


MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
Magistrada


ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA
Magistrado

Certifico: Que el auto anterior fue notificado por **ESTADOS No. 139** fijados hoy en la secretaría de este Tribunal a las 8:00 a.m. Medellín, **24 de septiembre de 2020**

Secretario